

Una visión para el Banco Interamericano de Desarrollo: 2020-2025

Declaración de Augusto López Claros

El propósito del Banco Interamericano de Desarrollo, tal como se establece en el Acuerdo por el que fue constituido, es "contribuir a la aceleración del proceso de desarrollo económico de los países miembros, tanto en forma individual como colectiva". A este respecto, el Acuerdo se hacía eco de convicciones similares expresadas en la Carta de las Naciones Unidas, que en 1945 pedía el uso de "mecanismos internacionales para promover el progreso económico y social de todos los pueblos". Al entrar el BID en su séptima década, en el contexto de la más severa crisis económica desde la Gran Depresión precipitada por el coronavirus, es apropiado preguntarse qué papel desempeñará el BID en los próximos años, ayudando a la región a volver a un camino de crecimiento y desarrollo económico inclusivo y sostenible. (Dada la importancia de COVID-19 he analizado algunas de sus ramificaciones en "Respondiendo a COVID-19: Prioridades Ahora y Preparándonos Para el Futuro," [el que puede leerse aquí](#)).

Respaldo en términos generales la estrategia actual del Banco de promover una mayor inclusión e igualdad social. No cabe duda de que, al menos parte de la inquietud observada en 2019, antes de la llegada de COVID-19, refleja las preocupaciones de amplios segmentos de la población de la región por la desaceleración del crecimiento económico, y su percepción de que los modestos beneficios recientes del mismo no se han distribuido [equitativamente](#). América Latina tiene niveles preocupantes de desigualdad de ingresos, y es un hecho empírico bien establecido que dicha desigualdad engendra inestabilidad política y socava la fortaleza de los procesos e instituciones democráticos. Adicionalmente, en las últimas décadas, se ha acentuado la conexión entre desigualdad y fractura social debido a los avances en las tecnologías de la comunicación: la disparidad de ingresos resulta ahora mucho más flagrante—y desalentadora—que hace tres décadas.

Por lo tanto, el BID debería estar a la vanguardia en la promoción de políticas públicas que ayuden a restablecer una visión más inclusiva del desarrollo en la región y ejercer una función de liderazgo y catalizadora trabajando con el sector privado y la sociedad civil en apoyo de nuevos enfoques innovadores para la inclusión social. Los desafíos son formidables y abarcan un amplio espectro de temas. Pero la buena noticia es que existe toda una reserva de conocimientos relevantes, fruto de la experiencia de otros países del mundo, a la que se puede recurrir en busca de percepciones y posibles aplicaciones. Cabe mencionar algunos: (a) una mejor gestión de unos recursos públicos escasos, otorgando mayor prioridad a las inversiones en educación y en el cultivo de habilidades, en particular entre los jóvenes; (b) la modernización de infraestructuras deterioradas; y (c) la mejora de los sistemas de salud pública, que COVID-19 ha demostrado estar en un estado pobre en muchos países de la región. Pero esto también requerirá un replanteamiento profundo de las actuales prioridades de gasto público, ya que muchos países de la región asignan desacertadamente recursos a subsidios de dudosa utilidad y desperdician considerables recursos en otros "gastos improductivos". Además, habrá que asumir un compromiso más firme con el uso de políticas públicas para fomentar un empleo más eficiente de los recursos presupuestarios, teniendo debidamente en cuenta la gestión sostenible de las finanzas [públicas](#), dado que son ya demasiados los países de la región que están operando muy por encima de unos niveles prudentes de endeudamiento.

La región debe seguir promoviendo el empoderamiento de las mujeres. La educación de las niñas ha demostrado ser especialmente eficaz produciendo un dividendo demográfico que impulsa el crecimiento económico per cápita. Al incorporarse cada vez más mujeres al mundo laboral, contribuyen más a los ingresos familiares, lo que se traduce en un aumento de los ahorros, una inversión más productiva y un mejor uso y reembolso del crédito, todo ello beneficioso para el crecimiento económico. Otros estudios muestran que un mayor poder femenino en el hogar propicia una mayor inversión en la salud y la educación de los hijos, con lo que se siembran las semillas para la acumulación de capital humano en la siguiente generación. A juzgar por la experiencia de otros países desarrollados, el empoderamiento político de las mujeres, que siguen estando infrarrepresentadas en los parlamentos y en los consejos de administración de las empresas, mejorará la calidad de la gobernanza en la región. La igualdad de género es fundamental para la prosperidad [humana](#).

La corrupción, como lo demuestran muchos bancos de datos sobre gestión pública de libre acceso, sigue siendo un grave problema en América Latina. Se entienden mejor ahora las consecuencias destructivas de la corrupción, que reduce los ingresos del gobierno, favorece la economía subterránea, dificulta el desarrollo del sector privado, empeora la distribución de los ingresos, aumenta la incertidumbre y conduce a diversas formas de delincuencia. En definitiva, la corrupción es devastadora para la prosperidad [humana](#). Existe ya todo un arsenal de instrumentos eficaces que ayudan a los países a hacer frente a los desafíos de la corrupción endémica, desde una mayor transparencia y apertura en el gasto público hasta la reducción de regulaciones engorrosas y opacas, pasando por el despliegue de tecnologías inteligentes y el fomento de una cooperación internacional más sólida en el contexto de diversas iniciativas multilaterales de lucha contra la [corrupción](#). Lo que está en juego no podría ser más importante para la región, ya que la corrupción resta legitimidad al gobierno a los ojos de la sociedad civil y la comunidad empresarial, y socava drásticamente el apoyo a las políticas públicas, por muy bien diseñadas que estén. El BID debe continuar fortaleciendo la capacidad institucional y el estado de derecho en la región, lo que supone entre otras cosas la aceptación de que las leyes deben ser de aplicación general, conocidas por todas las partes afectadas, comprensibles, no sujetas a contradicciones internas, no ser aplicadas retroactivamente ni sujetas a cambios frecuentes o arbitrarios, elementos clave del marco de un estado de derecho efectivo.

En las próximas décadas, América Latina y el Caribe se verán cada vez más afectados por el cambio climático y sus efectos colaterales, entre los que se cuentan el aumento del nivel del mar, la pérdida de biodiversidad y las alteraciones en los patrones climáticos, con consecuencias potencialmente desestabilizadoras para la agricultura de la [zona](#). Se requerirán inversiones considerables para efectuar la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables, transformar las redes de transporte, adaptar los procesos industriales y la agricultura, fortalecer la capacidad de las comunidades para sobreponerse a los desastres naturales y hacer provisiones ante el desplazamiento de poblaciones costeras y de aquellas vulnerables a la sequía.

Harán falta mecanismos más eficaces de cooperación internacional para hacer frente a estos desafíos, tanto a nivel mundial como en el ámbito de la región, particularmente con el trasfondo de COVID-19. El BID tiene una oportunidad única en los años venideros

para ejercer un liderazgo en la promoción de una mayor integración económica regional. Latinoamérica y el Caribe se beneficiarían enormemente de una mayor libertad de circulación de los factores de producción, de la creación de un espacio económico ampliado en el que se puedan aprovechar las sinergias y complementariedades, para mejorar la productividad y la eficiencia. Tengo la firme convicción de que esta visión de una región más unida podría constituir una poderosa fuerza cohesiva, que serviría como catalizador eficaz del cambio y la modernización, y a la vez impulsaría una nueva etapa en el desarrollo económico y social de la región.